

Ley 12846 de Brasil, sancionada por Dilma Rousseff el día 2/8/13. Responsabilidad objetiva administrativa y civil de las personas jurídicas por la comisión de actos contra la administración pública, nacional o extranjera.

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA hago saber que el Congreso Nacional decretó y yo sanciono la presente Ley:

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1º Esta ley dispone sobre la

Parágrafo único. Lo dispuesto en esta Ley se aplica a las sociedades empresarias y a las sociedades de hecho, con o sin personería jurídica, independientemente de la forma de organización o modelo societario adoptado, así como a cualquier fundación, asociación de entidades o personas, o sociedades extranjeras, que tengan sede, filial o representación en el territorio del país, constituídas de hecho o de derecho, y aún si lo fuesen en forma temporaria.

Art. 2º Las personas jurídicas serán responsabilizadas objetivamente, en los ámbitos Administrativo y civil, por los actos lesivos que prevé esta Ley practicados en su interés o beneficio, exclusivo o no.

Art. 3ª La responsabilidad de la persona jurídica no excluye la responsabilidad individual de sus directivos o administradores o de cualquier persona física, autora, coautora o partícipe del acto ilícito.

Parágrafo 1 La persona jurídica será responsable independientemente de la responsabilidad Individual de las personas físicas referidas en el párrafo anterior.

Parágrafo.2 Los directivos o administradores solamente serán responsables por esos actos ilícitos en la medida de su culpabilidad.

Art. 4 Subsiste la responsabilidad de la persona jurídica en la hipótesis de alteración contractual, transformación, incorporación, fusión o cesión societaria.

Parágrafo1 En las hipótesis de fusión e incorporación, la responsabilidad de la sucesora será restringida a la obligación de pago de la multa y reparación integral del daño causado, hasta el límite del patrimonio transferido, no siendo aplicables las demás sanciones previstas en esta Ley derivados de actos o hechos ocurridos antes de la fecha de fusión o incorporación, excepto en el caso de simulación o evidente intento de fraude, debidamente comprobados.

Parágrafo 2 Las sociedades controlantes, controladas, subsidiarias (coligadas) o, en el ámbito del respectivo contrato, las consorciadas, serán solidariamente responsables por

la comisión de los actos previstos en esta Ley, restringiéndose tal responsabilidad a la obligación de pago de la multa y la reparación integral del daño causado.

CAPÍTULO II

DE LOS ACTOS LESIVOS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL O EXTRANJERA.

Art. 5° A los fines de esta Ley, constituyen actos lesivos a la Administración pública, nacional o extranjera, todos aquéllos practicados por las personas jurídicas mencionadas en el párrafo único del art. 1° que atenten contra el patrimonio público nacional o extranjero, contra principios de la administración pública o contra los compromisos internacionales asumidos por la Nación, así definidos:

I – Prometer, ofrecer o dar, directa o indirectamente, ventaja indebida a un agente público, o a tercera persona relacionada con el mismo.

II – Comprobadamente, financiar, costear, patrocinar y de cualquier forma subvencionar la práctica de actos ilícitos previstos en esta Ley.

III – Comprobadamente, utilizar a interpósita persona física o jurídica para ocultar o disimular sus reales intereses o la identidad de los beneficiarios de los actos realizados.

IV – En lo relacionado a licitaciones y contratos:

- a) Grustrar o alterar fraudulentamente, mediante ajuste, combinación o de cualquier otra forma el carácter competitivo del procedimiento licitatorio público.
- b) Impedir, perturbar o alterar fraudulentamente la realización de cualquier acto del procedimiento licitatorio público.
- c) Apartar o procurar apartar a un oferente, por medio de fraude u ofrecimiento de ventaja de cualquier tipo.
- d) Alterar fraudulentamente una licitación pública o contrato de la competencia.
- e) Crear una persona jurídica, de modo fraudulento o irregular, para participar de una licitación pública o celebrar un contrato administrativo.
- f) Obtener ventaja o beneficio indebido, de modo fraudulento, por medio de modificaciones o prórrogas de contratos celebrados con la administración pública, sin autorización legal, en algún acto relacionado con la convocatoria a una licitación pública o en los respectivos instrumentos contractuales,
- g) O manipular a alterar fraudulentamente el equilibrio económico-financiero de los contratos celebrados con la administración pública.

V – Dificultar la actividad de investigación o fiscalización de órganos, entidades o agentes públicos, o interferir en su realización, inclusive en el ámbito de las agencias reguladoras y los órganos de fiscalización del sistema financiero nacional.

CAPITULO V

DEL ACUERDO DE ATENUACIÓN

Art.16. La autoridad máxima de cada órgano o entidad pública podrá celebrar un acuerdo de atenuación con las personas jurídicas responsables de la comisión de actos previstos en esta Ley que colaboren efectivamente con las investigaciones y/o proceso administrativo, siempre que de esta colaboración resulte:

I – La identificación de las demás personas envueltas en la infracción, cuando los hubiere y

II – La obtención acelerada de informaciones y documentos que comprueben el ilícito bajo investigación.

Parágrafo 1º El acuerdo solamente podrá ser celebrado si se reúnen, acumulativamente, los siguientes requisitos:

I – La persona jurídica sea la primera en manifestar su interés en cooperar para lograr el descubrimiento del ilícito:

II – La persona jurídica cesara completamente su participación en la infracción investigada a partir de la fecha de proposición del acuerdo;

III – La persona jurídica admita su participación en el ilícito y coopere plena y permanentemente con las investigaciones y el proceso administrativo, compareciendo, a su costo, siempre que fuese solicitado su comparencia, a todos los actos procesales, hasta su finalización.

Parágrafo 2º La celebración del acuerdo de atenuación eximirá a la persona jurídica de las sanciones previstas en el inciso II del art. 6º y en el art. 19 y reducirá hasta en 2/3 (dos tercios) de la multa aplicable.

Parágrafo 3º El acuerdo de atenuación no exime a la persona jurídica de reparar integralmente el daño causado.

Parágrafo 4º El acuerdo de atenuación estipulará las condiciones necesarias para asegurar la efectividad de la colaboración y resultado útil del proceso.

Parágrafo 5º Los efectos del acuerdo de atenuación seran extendidos a las personas jurídicas que integran el mismo grupo económico, de hecho o de derecho, siempre que las mismas firmen el acuerdo en forma conjunta y sean respetadas las condiciones establecidas en el acuerdo.

Parágrafo 6º La propuesta del acuerdo de atenuación solamente se hará pública después de la efectivización del respectivo acuerdo, salvo en el interés de las investigaciones y del proceso administrativo.

Parágrafo 7º El rechazo de una propuesta de acuerdo de atenuación no significará el reconocimiento de la comisión del acto ilícito investigado.

Parágrafo 8º En caso de incumplimiento del acuerdo de atenuación, la persona jurídica estará impedida de celebrar un nuevo acuerdo por el plazo de 3 (tres) años contados desde la fecha de conocimiento por la administración pública del referido incumplimiento.

Parágrafo 9º La celebración del acuerdo de atenuación interrumpe el plazo de prescripción de los actos ilícitos previstos por esta Ley.

Parágrafo 10º La Procuración General de la Nación es el órgano competente para celebrar los acuerdos de atenuación en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, así como en los casos de actos lesivos realizados contra una administración pública extranjera.

Art. 17. La administración pública también podrá celebrar acuerdos de atenuación con la persona jurídica responsable de la comisión de los ilícitos previstos en la Leyconsiderando la exención o atenuación de las sanciones administrativas establecidas en sus arts.

CAPITULO VI

DE LA RESPONSABILIDAD JUDICIAL

Art. 18. La responsabilidad de la persona jurídica en la esfera administrativa, no impide la posibilidad de su responsabilización en la esfera judicial.

Art. 19 En razón de la comisión de los actos previstos en el art. 5º de esta Ley, el Gobierno Nacional, las Provincias y la Gobernación de la CABA y los Municipios, por medio de sus respectivos cuerpos jurídicos u órganos de representación judicial, o equivalentes, y el Ministerio Público, podrán iniciar acciones tendientes a la aplicación de las siguientes sanciones a las personas jurídicas infractoras:

- I. Pérdida del dominio de bienes, derechos o valores que representen ventajas o provecho directa o indirectamente obtenidos con motivo del acto infractor, salvo el derecho de terceros de buena fe,
- II. Suspensión o interdicción parcial de sus actividades;
- III. Disolución compulsiva de la personería jurídica.
- IV. Prohibición de recibir incentivos, subsidios, subvenciones, donaciones o préstamos de órganos o entidades públicas y de instituciones financieras públicas o controladas por el poder público, por el plazo mínimo de 1 (uno) y el máximo de 5 (cinco) años.

Parágrafo 1º La disolución compulsiva de la personería jurídica será determinada cuando se compruebe:

I – Haber utilizado la personería jurídica en forma habitual para facilitar o promover la práctica de actos ilícitos; o

II – Haber sido constituida para ocultar o disimular intereses ilícitos o la identidad de los beneficiarios en la comisión de los actos;

Parágrafo 2º (VETADO)

Parágrafo 3º Las sanciones podrán ser aplicadas en forma aislada o acumulativa.

Parágrafo 4º El Ministerio Público o la Fiscalía o el órgano de representación judicial, o equivalente, del ente público podrá requerir la indisponibilidad de bienes, derechos o valores necesarios en garantía del pago de la multa o de la reparación integral del daño causado, conforme se previene en el art. 7º, salvo el derechos de tercero de buena fé.

Art. 20 En las acciones iniciadas por el Ministerio Público, podrán aplicarse las sanciones previstas en el art. 6º, sin perjuicio de aquéllas previstas en este Capítulo, a partir de constatarse la omisión de las autoridades competentes para promover la acción de responsabilización administrativa.

Art. 21. En las acciones de responsabilización judicial, será adoptado el procedimiento previsto en la Ley N° 7047, del 24 de julio de 1905.

Parágrafo único. La condena incluye la obligación de reparar, integralmente el daño causado por el acto ilícito, cuyo valor sera fijado en una posterior liquidación, si no constare expresamente en la sentencia.

CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES FINALES

Art. 22. Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional el Registro Nacional de Empresas Sancionadas - RNES que reunirá y dará a publicidad las sanciones aplicadas por los órganos o entidades de los Poderes Ejecutivos, Legislativo y Judiales de todas las esferas de gobierno por aplicación de esta Ley.

Parágrafo 1º: Los órganos y entidades referidos en este artículo deberán informar y mantener actualizados, en dicho Registro RNES, los datos relacionados con las sanciones aplicadas.

Parágrafo 2º. El RNES suministrará, entre otras, las siguientes informaciones acerca de las sanciones aplicadas:

I – Razón social y número de inscripción de la persona jurídica en la IG PJ.

II – Tipo de sanción, y

III – Fecha de aplicación y fecha final de vigencia del efecto limitador o impeditivo de la sanción, cuando fuese el caso.

Parágrafo 3º. Las autoridades competentes, para celebrar los acuerdos de atenuación previstos en esta Ley, también deberán prestar y mantener actualizadas en el RNES, luego de la entrada en vigencia del respectivo acuerdo, la información acerca del acuerdo de atenuación celebrado, salvo que ese procedimiento fuese a causar perjuicio a las investigaciones y al proceso administrativo.

Parágrafo 4º. En el caso que la persona jurídica no cumpla con los términos del acuerdo de atenuación, además de las informaciones previstas en el parágrafo 3º, deberá incluir en el RNES el respectivo incumplimiento.

Parágrafo 5º. Los registros de las sanciones y acuerdos de atenuación serán excluidos una vez transcurrido el plazo previamente establecido en el acto sancionador y del cumplimiento integral del acuerdo de atenuación y la reparación del eventual daño causado, mediante solicitud del órgano o entidad sancionadora.

Art.23. Los órganos o entidades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de todas las esferas del gobierno deberán informar y mantener actualizados, para fines de su publicidad, al Registro Nacional de Empresas Inidóneas y Suspendidas – RNEIS, de carácter público, instituido en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, los datos correspondientes a las sanciones aplicadas, en los términos de los arts. 87 y 88 de la Ley 8666, del 21 de junio de 1993.

Art.24. La multa y la pérdida de bienes, derechos o valores aplicados en base a esta Ley, serán destinados preferentemente a los órganos o entidades públicas lesionadas.

Art.25. Prescriben a los 5 (cinco) años las infracciones previstas en esta Ley, contados desde la fecha del hecho de la infracción o, en el caso de infracción permanente o continuada, desde el día en hubiere cesado.

Parágrafo único. La prescripción será interrumpida, en la esfera administrativa o judicial con la instauración del proceso que tenga por objeto la condena de la infracción.

Art.26. La persona jurídica será representada en el proceso administrativo según lo establezca su estatuto o contrato social.

Parágrafo 1º Las sociedades sin personería jurídica serán representadas por la persona que tenga a su cargo la administración de sus bienes.

Parágrafo 2º La persona jurídica extranjera será representada por el gerente, representante o administrador de su filial, agencia o sucursal abierta o instalada en el Brasil.

Art.27. La autoridad competente que, habiendo tenido conocimiento de las infracciones previstas en esta Ley, no adopten las providencias para la condena de esos actos, será responsable penal, civil y administrativamente en los términos de la legislación específica aplicable.

Art.28. Esta Ley se aplica a los actos lesivos cometidos por una persona jurídica brasileña contra la administración pública extranjera, aun cuando dichos actos sean cometidos en el exterior.

Art.29. Lo dispuesto en esta Ley no excluye las competencias del Consejo Administrativo de Defensa Económica, del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Economía para procesar y juzgar los actos que constituyan infracción al orden económico.

Art.30. La aplicación de las sanciones previstas en esta Ley no afectan los procesos de responsabilización y aplicación de las penalidad previstas por:

I – Acto de improbidad administrativa en los términos de la Ley N° 8429 del 2 de junio de 1992

y

II – Los actos ilícitos alcanzados por la Ley N° 8666, del 21 de junio de 1993, u otras normas de licitaciones u contratos de la administración pública, inclusive en lo relativo al Régimen Diferenciado de Contrataciones Públicas, instituido por Ley N° 12462 del 4 de agosto de 2011.

Art. 31. Esta Ley entra en vigor 180 (180) días después de la fecha de su publicación.

Brasilia, 1º de agosto de 2013, 192º da Independencia y 125º de la República.

DILMA ROUSSEFF

José Eduardo Cardozo

Luís Inácio Lucena Adams

Jorge Hage Sobrinho



Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 12.846, DE 1º DE AGOSTO DE 2013.

[Mensagem de veto](#)

[Vigência](#)

Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta Lei às sociedades empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente.

Art. 2º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nesta Lei praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não.

Art. 3º A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito.

§ 1º A pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da responsabilização individual das pessoas naturais referidas no caput.

§ 2º Os dirigentes ou administradores somente serão responsabilizados por atos ilícitos na medida da sua culpabilidade.

Art. 4º Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária.

§ 1º Nas hipóteses de fusão e incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nesta Lei decorrentes de atos e fatos ocorridos antes da data da fusão ou incorporação, exceto no caso de simulação ou evidente intuito de fraude, devidamente comprovados.

§ 2º As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no âmbito do respectivo contrato, as consorciadas serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos previstos

nesta Lei, restringindo-se tal responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado.

CAPÍTULO II

DOS ATOS LESIVOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NACIONAL OU ESTRANGEIRA

Art. 5º Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 1º, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos:

I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei;

III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV - no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

§ 1º Considera-se administração pública estrangeira os órgãos e entidades estatais ou representações diplomáticas de país estrangeiro, de qualquer nível ou esfera de governo, bem como as pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro.

§ 2º Para os efeitos desta Lei, equiparam-se à administração pública estrangeira as organizações públicas internacionais.

§ 3º Considera-se agente público estrangeiro, para os fins desta Lei, quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública em órgãos, entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro, assim como em pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais.

CAPÍTULO III

DA RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 6º Na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos nesta Lei as seguintes sanções:

I - multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua estimação; e

II - publicação extraordinária da decisão condenatória.

§ 1º As sanções serão aplicadas fundamentadamente, isolada ou cumulativamente, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e natureza das infrações.

§ 2º A aplicação das sanções previstas neste artigo será precedida da manifestação jurídica elaborada pela Advocacia Pública ou pelo órgão de assistência jurídica, ou equivalente, do ente público.

§ 3º A aplicação das sanções previstas neste artigo não exclui, em qualquer hipótese, a obrigação da reparação integral do dano causado.

§ 4º Na hipótese do inciso I do caput, caso não seja possível utilizar o critério do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa será de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) a R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais).

§ 5º A publicação extraordinária da decisão condenatória ocorrerá na forma de extrato de sentença, a expensas da pessoa jurídica, em meios de comunicação de grande circulação na área da prática da infração e de atuação da pessoa jurídica ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional, bem como por meio de afixação de edital, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, no próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade, de modo visível ao público, e no sítio eletrônico na rede mundial de computadores.

§ 6º (VETADO).

Art. 7º Serão levados em consideração na aplicação das sanções:

I - a gravidade da infração;

II - a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator;

III - a consumação ou não da infração;

IV - o grau de lesão ou perigo de lesão;

V - o efeito negativo produzido pela infração;

VI - a situação econômica do infrator;

VII - a cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações;

VIII - a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica;

IX - o valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade pública lesados; e

X - (VETADO).

Parágrafo único. Os parâmetros de avaliação de mecanismos e procedimentos previstos no inciso VIII do caput serão estabelecidos em regulamento do Poder Executivo federal.

CAPÍTULO IV

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO

Art. 8º A instauração e o julgamento de processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica cabem à autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, que agirá de ofício ou mediante provocação, observados o contraditório e a ampla defesa.

§ 1º A competência para a instauração e o julgamento do processo administrativo de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica poderá ser delegada, vedada a subdelegação.

§ 2º No âmbito do Poder Executivo federal, a Controladoria-Geral da União - CGU terá competência concorrente para instaurar processos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas ou para avocar os processos instaurados com fundamento nesta Lei, para exame de sua regularidade ou para corrigir-lhes o andamento.

Art. 9º Competem à Controladoria-Geral da União - CGU a apuração, o processo e o julgamento dos atos ilícitos previstos nesta Lei, praticados contra a administração pública estrangeira, observado o disposto no Artigo 4 da Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, promulgada pelo [Decreto nº 3.678, de 30 de novembro de 2000](#).

Art. 10. O processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis.

§ 1º O ente público, por meio do seu órgão de representação judicial, ou equivalente, a pedido da comissão a que se refere o caput, poderá requerer as medidas judiciais necessárias para a investigação e o processamento das infrações, inclusive de busca e apreensão.

§ 2º A comissão poderá, cautelarmente, propor à autoridade instauradora que suspenda os efeitos do ato ou processo objeto da investigação.

§ 3º A comissão deverá concluir o processo no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da publicação do ato que a instituir e, ao final, apresentar relatórios sobre os fatos apurados e eventual responsabilidade da pessoa jurídica, sugerindo de forma motivada as sanções a serem aplicadas.

§ 4º O prazo previsto no § 3º poderá ser prorrogado, mediante ato fundamentado da autoridade instauradora.

Art. 11. No processo administrativo para apuração de responsabilidade, será concedido à pessoa jurídica prazo de 30 (trinta) dias para defesa, contados a partir da intimação.

Art. 12. O processo administrativo, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade instauradora, na forma do art. 10, para julgamento.

Art. 13. A instauração de processo administrativo específico de reparação integral do dano não prejudica a aplicação imediata das sanções estabelecidas nesta Lei.

Parágrafo único. Concluído o processo e não havendo pagamento, o crédito apurado será inscrito em dívida ativa da fazenda pública.

Art. 14. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores e sócios com poderes de administração, observados o contraditório e a ampla defesa.

Art. 15. A comissão designada para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica, após a conclusão do procedimento administrativo, dará conhecimento ao Ministério Público de sua existência, para apuração de eventuais delitos.

CAPÍTULO V

DO ACORDO DE LENIÊNCIA

Art. 16. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração resulte:

I - a identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber; e

II - a obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito sob apuração.

§ 1º O acordo de que trata o caput somente poderá ser celebrado se preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar para a apuração do ato ilícito;

II - a pessoa jurídica cesse completamente seu envolvimento na infração investigada a partir da data de propositura do acordo;

III - a pessoa jurídica admita sua participação no ilícito e coopere plena e permanentemente com as investigações e o processo administrativo, comparecendo, sob suas expensas, sempre que solicitada, a todos os atos processuais, até seu encerramento.

§ 2º A celebração do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica das sanções previstas no inciso II do art. 6º e no inciso IV do art. 19 e reduzirá em até 2/3 (dois terços) o valor da multa aplicável.

§ 3º O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado.

§ 4º O acordo de leniência estipulará as condições necessárias para assegurar a efetividade da colaboração e o resultado útil do processo.

§ 5º Os efeitos do acordo de leniência serão estendidos às pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo econômico, de fato e de direito, desde que firmem o acordo em conjunto, respeitadas as condições nele estabelecidas.

§ 6º A proposta de acordo de leniência somente se tornará pública após a efetivação do respectivo acordo, salvo no interesse das investigações e do processo administrativo.

§ 7º Não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado a proposta de acordo de leniência rejeitada.

§ 8º Em caso de descumprimento do acordo de leniência, a pessoa jurídica ficará impedida de celebrar novo acordo pelo prazo de 3 (três) anos contados do conhecimento pela administração pública do referido descumprimento.

§ 9º A celebração do acordo de leniência interrompe o prazo prescricional dos atos ilícitos previstos nesta Lei.

§ 10. A Controladoria-Geral da União - CGU é o órgão competente para celebrar os acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo federal, bem como no caso de atos lesivos praticados contra a administração pública estrangeira.

Art. 17. A administração pública poderá também celebrar acordo de leniência com a pessoa jurídica responsável pela prática de ilícitos previstos na [Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993](#), com vistas à isenção ou atenuação das sanções administrativas estabelecidas em seus [arts. 86 a 88](#).

CAPÍTULO VI

DA RESPONSABILIZAÇÃO JUDICIAL

Art. 18. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial.

Art. 19. Em razão da prática de atos previstos no art. 5º desta Lei, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por meio das respectivas Advocacias Públicas ou órgãos de representação judicial, ou equivalentes, e o Ministério Público, poderão ajuizar ação com vistas à aplicação das seguintes sanções às pessoas jurídicas infratoras:

I - perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direta ou indiretamente obtidos da infração, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé;

II - suspensão ou interdição parcial de suas atividades;

III - dissolução compulsória da pessoa jurídica;

IV - proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, pelo prazo mínimo de 1 (um) e máximo de 5 (cinco) anos.

§ 1º A dissolução compulsória da pessoa jurídica será determinada quando comprovado:

I - ter sido a personalidade jurídica utilizada de forma habitual para facilitar ou promover a prática de atos ilícitos; ou

II - ter sido constituída para ocultar ou dissimular interesses ilícitos ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados.

§ 2º (VETADO).

§ 3º As sanções poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa.

§ 4º O Ministério Público ou a Advocacia Pública ou órgão de representação judicial, ou equivalente, do ente público poderá requerer a indisponibilidade de bens, direitos ou valores necessários à garantia do pagamento da multa ou da reparação integral do dano causado, conforme previsto no art. 7º, ressalvado o direito do terceiro de boa-fé.

Art. 20. Nas ações ajuizadas pelo Ministério Público, poderão ser aplicadas as sanções previstas no art. 6º, sem prejuízo daquelas previstas neste Capítulo, desde que constatada a omissão das autoridades competentes para promover a responsabilização administrativa.

Art. 21. Nas ações de responsabilização judicial, será adotado o rito previsto na [Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985](#).

Parágrafo único. A condenação torna certa a obrigação de reparar, integralmente, o dano causado pelo ilícito, cujo valor será apurado em posterior liquidação, se não constar expressamente da sentença.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22. Fica criado no âmbito do Poder Executivo federal o Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, que reunirá e dará publicidade às sanções aplicadas pelos órgãos ou entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todas as esferas de governo com base nesta Lei.

§ 1º Os órgãos e entidades referidos no caput deverão informar e manter atualizados, no Cnep, os dados relativos às sanções por eles aplicadas.

§ 2º O Cnep conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das sanções aplicadas:

I - razão social e número de inscrição da pessoa jurídica ou entidade no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;

II - tipo de sanção; e

III - data de aplicação e data final da vigência do efeito limitador ou impeditivo da sanção, quando for o caso.

§ 3º As autoridades competentes, para celebrarem acordos de leniência previstos nesta Lei, também deverão prestar e manter atualizadas no Cnep, após a efetivação do respectivo acordo, as informações acerca do acordo de leniência celebrado, salvo se esse procedimento vier a causar prejuízo às investigações e ao processo administrativo.

§ 4º Caso a pessoa jurídica não cumpra os termos do acordo de leniência, além das informações previstas no § 3º, deverá ser incluída no Cnep referência ao respectivo descumprimento.

§ 5º Os registros das sanções e acordos de leniência serão excluídos depois de decorrido o prazo previamente estabelecido no ato sancionador ou do cumprimento integral do acordo de leniência e da reparação do eventual dano causado, mediante solicitação do órgão ou entidade sancionadora.

Art. 23. Os órgãos ou entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todas as esferas de governo deverão informar e manter atualizados, para fins de publicidade, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, de caráter público, instituído no âmbito do Poder Executivo federal, os dados relativos às sanções por eles aplicadas, nos termos do disposto nos [arts. 87 e 88 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993](#).

Art. 24. A multa e o perdimento de bens, direitos ou valores aplicados com fundamento nesta Lei serão destinados preferencialmente aos órgãos ou entidades públicas lesadas.

Art. 25. Prescrevem em 5 (cinco) anos as infrações previstas nesta Lei, contados da data da ciência da infração ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

Parágrafo único. Na esfera administrativa ou judicial, a prescrição será interrompida com a instauração de processo que tenha por objeto a apuração da infração.

Art. 26. A pessoa jurídica será representada no processo administrativo na forma do seu estatuto ou contrato social.

§ 1º As sociedades sem personalidade jurídica serão representadas pela pessoa a quem couber a administração de seus bens.

§ 2º A pessoa jurídica estrangeira será representada pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil.

Art. 27. A autoridade competente que, tendo conhecimento das infrações previstas nesta Lei, não adotar providências para a apuração dos fatos será responsabilizada penal, civil e administrativamente nos termos da legislação específica aplicável.

Art. 28. Esta Lei aplica-se aos atos lesivos praticados por pessoa jurídica brasileira contra a administração pública estrangeira, ainda que cometidos no exterior.

Art. 29. O disposto nesta Lei não exclui as competências do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, do Ministério da Justiça e do Ministério da Fazenda para processar e julgar fato que constitua infração à ordem econômica.

Art. 30. A aplicação das sanções previstas nesta Lei não afeta os processos de responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes de:

I - ato de improbidade administrativa nos termos da [Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992](#);

e

II - atos ilícitos alcançados pela [Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993](#), ou outras normas de licitações e contratos da administração pública, inclusive no tocante ao Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC instituído pela [Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011](#).

Art. 31. Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua publicação.

Brasília, 1º de agosto de 2013; 192º da Independência e 125º da República.

DILMA ROUSSEFF

José Eduardo Cardozo

Luís Inácio Lucena Adams

Jorge Hage Sobrinho